

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTES	: ALBA AIDEE AGUDELO AGUDELO
DEMANDADOS	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A
LITISCONSORCIO	: GONZALO EMILIO ÁLVAREZ SEPÚLVEDA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-014-2016-01388-01
RADICADO INTERNO	: 042-21
DECISIÓN	: REVOCAR SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 107

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el Decreto 806 de 2020: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente desde el 23 de enero de 2007, causada por el fallecimiento de su hijo John Edison Álvarez Agudelo; los intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación; y las costas procesales.

Fundamenta sus pretensiones en que el joven John Edison Álvarez Agudelo falleció el 12 de enero de 2007 por causas de origen común; que su hijo era soltero, no había procreado hijos, y con los ingresos recibidos de su trabajo aportaba considerablemente para todos los gastos del hogar. Que al momento

del fallecimiento, el joven John Edison Álvarez Agudelo convivía con su padre Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo, quien era pensionado de la policía nacional, y con sus cinco hermanos menores. El causante dejó causado el derecho, al haber cotizado en PROTECCIÓN S.A. un total de 68,29 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a su fallecimiento. Que solicitó la pensión de sobrevivientes el 13 de marzo de 2007, la cual fue negada mediante comunicado del 27 de mayo de 2007, por no lograr demostrar la dependencia económica de la peticionaria frente al causante. Que la entidad demandada no realizó estudio a fondo de la situación económica de la familia, simplemente aduce que no existía dependencia económica, desconociendo las múltiples obligaciones de la familia, los gastos personales de la demandante, quien es ama de casa y los cuatro hermanos menores. Que el causante, desde el mismo momento que ingresó a laborar, llevó a su cargo gran porcentaje de la obligación económica del hogar.

Por medio de auto del 23 de noviembre de 2017, el Juzgado ordenó integrar al Sr. GONZALO EMILIO ÁLVAREZ SEPÚLVEDA en calidad de interviniente excluyente (fls. 89 y 90 del expediente digital); y en la etapa de decisiones de decisiones previas, el despacho consideró que la figura como se debe integrar el padre del causante es en calidad de litisconsorte cuasi necesario por pasiva en los términos del artículo 61 del CGP, y decide integrarlo en dicha calidad (fls. 112 a 114).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 28 de octubre de 2020, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que a la demandante le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo John Edison Álvarez Agudelo. CONDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A a reconocer y pagar a favor de la demandante la pensión de sobreviviente causada desde el 14 de diciembre de 2013; condenó a la accionada a continuar reconociendo a la demandante, a partir del 1º de noviembre de 2020, una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, a razón de 14 mesadas al año, sin perjuicio de los incrementos y reajustes anuales de ley; al pago de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993 sobre el valor de cada una de las mesadas pensionales causadas desde el 14 de diciembre de 2013. AUTORIZÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A a descontar del retroactivo reconocido, el valor de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud causadas, advirtiéndole que las debe trasladar a la correspondiente EPS de la

demandante; y a descontar del retroactivo pensional la suma de \$422.955 por concepto de devolución de saldos que le fue reconocida a la demandante, debidamente indexada al momento del pago. ABSOLVIÓ a la AFP demanda de las demás pretensiones invocadas en su contra. DECLARÓ probada la excepción de compensación y parcialmente la excepción de prescripción.

Así mismo, CONDENÓ al Sr. Gonzalo Emilio Álvarez Sepúlveda, padre del afiliado fallecido, a reintegrar a las arcas de PROTECCIÓN S.A la suma de \$422.955 debidamente indexados. CONDENÓ en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A a favor de la accionante.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandada manifestó su inconformidad frente al fallo por considerar **en primer lugar**, que la decisión que adoptó Protección, corresponde a las manifestaciones realizadas en el procedimiento administrativo por parte del grupo familiar del afiliado John Edison Álvarez Agudelo, y de las cuales no se vislumbra que el aporte del causante correspondiera a un valor diferente a asumir sus propios gastos.

Frente a la posición de tomar el aporte que el causante realizaba al pago de los servicios públicos y que el afiliado hacía parte del grupo familiar, considera la apoderada que el joven John Edison Álvarez Agudelo hacía parte de esa cohabitación, y los \$200.000 correspondían al aporte que hacía frente a sus propios gastos; que no es concordante con el ingreso que el afiliado fallecido tenía, porque también tenía los gastos propios externos tal y como era la educación y traslado a su lugar de trabajo.

Que no encuentra los criterios a los cuales hace referencia el juez de la sentencia C 116 de 2006, toda vez que es clara la jurisprudencia al indicar cuales son esos criterios para entender la dependencia económica, y en el caso en concreto no se encuentra acreditada la misma, sin que se pueda entender que todo aporte que se realiza por un cohabitante de un núcleo familiar sea para la dependencia económica, porque al haber un ingreso superior hay un gasto superior. Y con base en lo anterior, es que la AFP Protección actuó, bajo los parámetros de la Ley 797 del 2003, requisitos que fueron ratificados por la Corte Constitucional.

Considera que no se dieron los presupuestos con base en la prueba allegada y los documentos ratificados, para entender que la demandante tuviera dependencia económica respecto de su hijo, porque frente a los \$200.000, ellos manifestaron dentro de la diligencia administrativa, que correspondían a esa colaboración que él hacía para sus propios gastos.

En segundo lugar, se opone a la decisión de tomar al Sr. Gonzalo Emilio Álvarez Sepúlveda como litisconsorte cuasinecesario, porque se está hablando de una cuenta, la cual no puede sufrir divisiones, es una cuenta única y la cual requiere de los capitales para la conformación y para el derecho. En caso de hacer una división de la cuenta, el porcentaje que le debió corresponder a la demandante era del 50% y no de un salario mínimo.

En tercer lugar, solicita una revisión de manera íntegra, toda vez que se alega el incumplimiento de los criterios de la Ley 797 de 2003 en los cuales exige no solo acreditar la densidad de semanas, sino que también obedece a un criterio de capitalización, y en este caso la cuenta se encuentra descapitalizada y sin que se pueda aceptar que posteriormente una persona pueda presentar una revisión del proceso cuando ya se benefició de esa prerrogativa a la cual ella optaba como lo fue la devolución de saldos.

Que no estaba satisfecho el requisito de dependencia económica, el cual fue ratificado con la voluntad de recibir los dineros y de los cuales han hecho usufructo y hoy obtenga otro beneficio adicional por parte del sistema, lo que da lugar al rompimiento de la seguridad jurídica, solidaridad frente a los demás afiliados y la igualdad de las partes

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante, solicita se confirme la sentencia al considerar que se probó la dependencia económica de la señora Alba Aidee Agudelo Agudelo en condición de madre del afiliado fallecido, conforme lo establece la sentencia C 111 de 2006, ello es, que la dependencia no se exigía total y absoluta respecto del fallecido, en cuanto ello vulneraría el principio y deber de solidaridad, así como el principio de proporcionalidad, y los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, así como los deberes que le incumben al Estado de solidaridad y protección integral de la familia.

No obstante, los recursos provenientes de fuentes distintas al causante, las mismas no constituían una forma de auto sostenimiento para la demandante, la cual dependía del ingreso proporcionado por su hijo para garantizar unas condiciones de vida congruas y dignas.

El apoderado de la sociedad accionada solicita la revocatoria de la sentencia al desconocer la decisión las realidades propias de conformación del afiliado y su entorno, la prueba documental arrimada, las contradicciones frente al aparente apoyo económico prestado y la confesión que la parte realiza, existiendo un rompimiento de la congruencia probatoria y lo fallado, en tanto, existe la confesión en doble vía, donde la primera de ellas lo que reposa en el historial del afiliado, la cual no fue objetada y la segunda, dentro del proceso y de la cual se evidencian contradicciones. En el trámite administrativo adelantado por Protección el aporte que realizaba el afiliado fallecido, es el aporte que contempla la ley como la asignación propia para asumir los costos personales de subsistencia y sostenimiento como son el pago de su vivienda, alimentación, servicios domiciliarios, lo que genera la confesión de parte y la inexistencia de la dependencia económica.

Y se opone a la condena de los intereses moratorios.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar: i) Si la demandante acreditó el requisito de la dependencia económica de su hijo fallecido; ii) Si la cuenta de ahorro individual del afiliado por estar descapitalizada, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobreviviente; y iii) Si el Sr. Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo debió ser integrado al proceso en calidad de litisconsorcio necesario y no como litisconsorcio cuasi necesario por pasiva.

1. Respecto de la dependencia económica

Se encuentra probado en el proceso que el joven John Edison Álvarez Agudelo era hijo de los señores Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo y Alba Aidee Agudelo Agudelo según registro civil de nacimiento de folios 11 del expediente digital, y falleció el 12 de enero de 2007 (fls 10); que los padres del causante solicitaron la pensión de sobreviviente, y por medio de comunicación del 25 de mayo de 2007, la AFP Protección S.A. pese a establecer que el afiliado dejó acreditados los requisitos, negó la prestación económica a los reclamantes por

no acreditar la dependencia económica total y absoluta respecto del afiliado fallecido, porque se desvirtúa la dependencia económica porque el padre es pensionado de la Policía Nacional, y les reconoció el derecho a reclamar la devolución de saldos (fls. 17 y 18).

Ahora, en lo que respecta al requisito de la dependencia económica de los padres del causante, se siente que el art. 74 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003 establece:

“Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. ... d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente **de forma total y absoluta** de este.

Partiendo de lo anterior, debe decirse que esta Sala ha entendido que *“La dependencia económica es la sujeción de una persona hacia otra, por proporcionarle esta lo necesario para sustentar su vida y llevarla de manera moderada, sencilla, decorosa, de acuerdo a su posición social”* (Sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, del 13 de marzo de 1998).

En este mismo sentido, se tiene que desde el año 2003, la Corte Suprema de Justicia hizo claridad del significado de dependencia económica, y en la sentencia 19.867 del 27 de marzo de 2003, se sostuvo que ésta no debe entenderse como total y absoluta, dándose la posibilidad de admitir que los padres dependientes económicamente de alguno de sus hijos, se puedan beneficiar en forma conjunta de otros hijos o por actividades dirigidas a obtener la subsistencia, siempre que las ayudas no se conviertan en aportes autosuficientes que hagan desaparecer la dependencia.

Concordado con lo anterior, la dependencia que debe acreditar, no tiene que ser total y absoluta, es decir, es posible que la persona que reclama pueda percibir rentas o ingresos adicionales, y ser beneficiaria, siempre y cuando estos no alcancen a cubrir los costos de su propia vida (CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014, CSJ SL6390-2016).

Así mismo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2698-2019 que, para declarar la existencia de la dependencia económica, además de otras condiciones, es necesario demostrar que **el aporte proveniente del**

causante hubiera sido significativo y proporcionalmente representativo en relación con los otros ingresos percibidos por quien reclama, en la anterior providencia se reiteró al respecto sobre el mismo concepto lo ya indicado en las sentencias SL 14923 de 2014, reiterada en SL 15116 de 2014 y SL 14539 de 2016. Y que la ayuda económica realizada como lo hace un bien hijo, no es prueba de la existencia de la dependencia (sentencia SL 650 de 2020).

Por otra parte, es importante recordar que la dependencia económica de los padres se debe definir y establecer en cada caso particular y concreto para el momento del deceso del afiliado, tema que es bien definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006, bajo el concepto del mínimo vital cualitativo, según el cual deben ser evaluadas las condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular, por lo que para hablar de independencia económica se debe contar con los recursos suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.

Sobre el particular, en primera instancia se consideró en síntesis, que al negar la pretensión al AFP accionada, no tuvo en cuenta la totalidad del contexto sociofamiliar del afiliado, porque solo tuvo en cuenta el ingreso percibido por el padre en calidad de pensionado, pero faltó hacer una ponderación frente aspectos como son; que el grupo familiar estaba constituido por siete hijos, padre, madre y una anciana y pagaban arriendo, por lo que el pensionado no era capaz de llevar una obligación con su mesada pensional, y en este sentido consideró el A Quo, que el aporte del afiliado fallecido que como mínimo era de \$200.000 para las obligaciones del hogar, no se pueden tener en cuenta como el simple aporte de un buen hijo de familia; si con ese aporte se realizaba el pago de servicios públicos, cuando este servicio se suspende por falta de pago se ve la afectación del mínimo vital congruo de las personas que conforman el núcleo familiar.

Visto lo anterior, luego de analizarse la prueba en su conjunto, a la luz de las reglas de la sana crítica y la libre formación del convencimiento del artículo 61 del C.P. del T. y de la S.S., considera la Sala que en el presente caso no existe duda que el joven John Edison Álvarez Agudelo realizaba aportes a su núcleo familiar, sin embargo, ello lo hacía como lo hace un buen hijo de familia y como parte de vivir en la misma casa. Obsérvese además que no se encuentra

acreditado a cuanto ascendía el aporte realizado por el joven John Edison Álvarez Agudelo al núcleo familiar, por las siguientes razones:

- En la investigación administrativa visibles a fls 78 y 79 los padres del joven John Edison Álvarez Agudelo manifestaron que al momento de la muerte, el aporte mensual que este hacía al grupo familiar era de **\$200.000**, y en la declaración extrajuicio rendida por los Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo y Alba Aidee Agudelo Agudelo el 12 de marzo de 2007, manifestaron que su hijo les brindaba *“una **cuota semanas** de cincuenta mil pesos (50.000) para colaborar con los gastos de la casa”* (Negrilla fuera del texto) (fl. 80). Sin embargo, dichas afirmaciones son totalmente contrarias con lo manifestado en los interrogatorios de parte rendidos en el proceso por los señores Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo y Alba Aidee Agudelo Agudelo quienes aseguran que el aporte realizado por su hijo era de **\$500.000 o \$600.000**.

- También existen inconsistencias en el interrogatorio de la Sra. Alba Aidee Agudelo Agudelo, cuando afirma que, para esa fecha de la muerte del afiliado, los ingresos del hogar eran de **\$1.200.000**, los cuales se derivaban del esposo que era pensionado y de su hijo que aportaba \$500.000 o \$600.000, y que **ambos sueldos se juntaban**. Por lo tanto, de ser está afirmación verdadera, ello implica que al sumar la pensión del Sr. Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo ascendía a \$1.200.000 y el aporte de John Edison Álvarez Agudelo era de \$500.000 o \$600.000, la totalidad de los gastos del hogar debían ser de **\$1.700.000 o \$1.800.000**, valor que no corresponde con los gastos señalados por la demandante en su interrogatorio.

- Por su parte, la **testigo Luz Estela Quiroz Moreno** no logra determinar a cuánto ascendía el aporte realizado por John Edison Álvarez Agudelo, al manifestar que **no tiene conocimiento de cuanto era el aporte realizado por el causante**, que ella sabe que John Edison Álvarez Agudelo le daba dinero a la mamá y ayudaba con los servicios, comida y con los hermanos, que ella lo veía entrar con bolsas de legumbres; que cada vez que le pagaban al John Edison Álvarez Agudelo, él les ayudaba económicamente; que ella vio en una o dos ocasiones que el causante le entregó la plata al papá para los servicios y sabe que a la mamá le daba plata para los gastos de ella; que esto lo sabe porque en dos ocasiones le tocó ver que él les entregaba la plata y porque la mamá le decía que John Edison Álvarez Agudelo era la mano derecha, por ser tan amiga de la mamá se dio cuenta que les ayudaba mucho.

Luz vio en ocasiones que él le entregaba al papa el dinero para los servicios
Y sabe que a la mama le daba dinero para los gastos de ella.

- La **testigo Martha Lucia Chalarca López**, afirmó que John Edison aportaba **todo el sueldo** devengado porque le daba \$200.000 a la mamá y con lo otro aportaba con lo que hacía falta en la casa, lo que no se compagina con lo dicho por las anteriores declaraciones. la razón de la ciencia de su dicho se basa en que veía que el causante llegaba con cosas y la demandante le contaba que John le daba \$200.000 para los gastos de ella y para suplir muchas cosas; y que ella veía que el hijo daba el aporte quincenal, los días 15 y los 30.

Declaración que adicionalmente se contradice con la declaración extrajuicio de los señores Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo y Alba Aidee Agudelo Agudelo en donde aseguraron que el aporte era semanal.

Ahora bien, el A Quo consideró que como mínimo, el aporte realizado por el afiliado fallecido era de \$200.000 y que dicho aporte era necesario porque con él se realizaba el pago de los servicios públicos. Afirmación para la Sala, tampoco cuenta con soporte probatorio, pues al retomar el contenido de la investigación administrativa y en las declaraciones extrajuicio de fls 78 a 80, claramente los padre del causante aseguraron dos meses después de ocurrido el siniestro, que con el aporte de \$200.000 realizado por su hijo sufragaban gastos del mercado, afirmación que se contradice parcialmente con lo dicho por la testigo Luz Estela Quiroz Moreno, la cual aseguró que John Edison Álvarez Agudelo ayudaba igualmente para el pago de servicios, gastos de sus hermanos y le daba dinero a su madre.

En conclusión, considera la Sala, que al no haber sido demostrado por parte de la Sra. Alba Aidee Agudelo Agudelo, en forma clara y fehaciente, a cuanto ascendía el aporte realizado por el joven John Edison Álvarez Agudelo, ello es, si lo era en la suma de \$200.000 o si por el contrario era un aporte de \$500.000 o \$600.000, igualmente para saber en qué se destinaba ese dinero en los gastos del hogar y tener un conyugue pensionado, no se puede entrar a determinar el cumplimiento del segundo elemento estructural de la dependencia económica, señalado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 650 de 2020, y que corresponde a *“ii) una relación de **subordinación económica** respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado*

significativo.”, a efectos de determinar que la demandante dependía económicamente de su hijo.

Y es que era necesario acreditar el valor de la ayuda económica, a efectos de determinar si lo brindado por el causante su madre, era relevante para su sostenimiento mínimo, teniendo en cuenta que la sentencia SL 18517 de 2017 reiterada en la sentencia SL 650 de 2020 plasmó: *“... no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, **sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante** para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas”* (Resalto del despacho).

En razón a lo anterior, se REVOCARÁ en todas sus partes la sentencia de primera instancia, para en su lugar ABSOLVER a la sociedad PROTECCIÓN S.A. de todas y cada una de pretensiones invocadas en su contra, y en consecuencia, ABSOLVER al Sr. Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo de reintegrar a las arcas de PROTECCIÓN S.A la suma recibida con ocasión al pago de la devolución de saldos.

No se hace necesario, por sustracción de materia resolver los demás puntos de la apelación, y frente a los demás aspectos alegados por la AFP PROTECCIÓN S.A, no se hará un pronunciamiento, teniendo en cuenta que el principio consonancia establecido en el art. 66A del CPT y SS establece “La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”.

Se revocarán las costas de primera instancia, y se CONDENARÁ en costas en primera instancia a la parte accionante, por ser la parte vencida en el proceso. Sin costas en esta instancia por salir avante el recurso de apelación presentado por la entidad accionada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la sentencia de primera instancia, para en su lugar **ABSOLVER** a la sociedad PROTECCIÓN S.A. de todas y cada una de pretensiones invocadas en su contra, y en consecuencia **ABSOLVER** al Sr. Gonzalo Emilio Álvarez Agudelo de reintegrar a las arcas de PROTECCIÓN S.A la suma recibida con ocasión al pago de la devolución de saldos.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en primera instancia a cargo de la parte accionante. Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notifica por ESTADOS.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 074 del 03 de mayo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>